



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

D. JOSÉ GIMÉNEZ CERVANTES, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA:

Que en la Sesión del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 30 de julio de 2002, se ha adoptado el siguiente Acuerdo, en relación con el expediente AJ 2002/6681:

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE PONE FIN AL PERIODO DE INFORMACIÓN PREVIA INICIADO EN RELACIÓN CON ESCRITO PRESENTADO POR LA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES “TORRE RAMONA” SOBRE DETERMINADAS PRÁCTICAS REALIZADAS POR RETEVISIÓN MÓVIL, S.A. RELACIONADAS CON EL DENOMINADO “CONTRATO LIBRE”

HECHOS

Primero.- Con fecha 24 de abril de 2002, tuvo entrada en el Registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (en adelante, CMT), escrito presentado por la Asociación de Consumidores “Torre Ramona”.

En dicho escrito se expone que la citada Asociación ha recibido “numerosas quejas y reclamaciones” referidas a la publicidad que realiza la empresa “Amena” (Retevisión Móvil, S.A.) en relación con el denominado “Contrato Libre”. En concreto, se señala que, pese a que la publicidad de este contrato no hace referencia a ningún tipo de exclusión, “en algunos casos” la contratación ha sido denegada, alegando motivos de solvencia o que no se tienen cumplidos los veinticinco años de edad.

Al escrito remitido, se le acompaña copia de los documentos correspondientes a la comunicación mantenida por la mencionada Asociación con el Servicio de Atención al Cliente de Retevisión Móvil, S.A. (en adelante, AMENA) en febrero de 2002 en relación con los hechos expuestos (y, en concreto, respecto del contrato identificado como “contrato 35”), y copia de cierta publicidad relativa al “Contrato Libre”.

Segundo.- Mediante escrito de fecha 30 de abril de 2002 esta Comisión notificó a Amena la apertura de un periodo de información previa con el fin de conocer con mayor detalle las circunstancias concretas del escrito presentado



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

y, consecuentemente la conveniencia o no de iniciar el correspondiente procedimiento, y de modo que los notificados pudieran efectuar las alegaciones que estimasen convenientes.

Tercero.- Mediante escrito de 30 de abril de 2002 se requirió a Amena para que aportara la siguiente información:

- Condiciones generales que se aplican al “Contrato Libre”, en sus diferentes modalidades.
- Requisitos subjetivos que se exigen para la contratación de este servicio, en las diferentes modalidades del “Contrato Libre”, y justificación de su exigencia; en particular, si el usuario ha de ser mayor de veinticinco años y si ha de cumplir un requisito de solvencia y cómo se comprueba.
- Requisitos de contratación que se anuncian en la publicidad que se realiza del “Contrato Libre” en sus distintas modalidades.

Cuarto.- Mediante escrito de 30 de abril de 2002 se requirió a la Asociación de Consumidores “Torre Ramona” para que aportara la siguiente información:

- Información sobre la modalidad o modalidades de contrato a la que se refieren las quejas y reclamaciones recibidas por la Asociación.
- Indicación sobre la fecha aproximada en que se han recibido las quejas y reclamaciones, e indicación de si en la actualidad o en fecha reciente se continúan produciendo.
- Información sobre las causas de denegación aducidas por la empresa denunciada; en particular, indicación de los diferentes motivos, y aclaración de las circunstancias en que la empresa denunciada procede a la denegación por “motivos de solvencia”.
- Copia de las condiciones generales del contrato o contratos a que se refieren las quejas y reclamaciones recibidas.
- Copia de los documentos en que se concreten las quejas y reclamaciones que hayan presentado a la Asociación los usuarios que han intentado contratar el servicio.
- Otras evidencias de la publicidad efectuada por Retevisión Móvil, S.A. en relación con el servicio a que se refiere la denuncia, adicionales a las ya presentadas.

Quinto.- Mediante escrito que tuvo su entrada en esta Comisión el día 27 de mayo de 2002, la Asociación de Consumidores “Torre Ramona” atendió al requerimiento que se le efectuó, manifestando que las reclamaciones a las que hace referencia en su escrito se recibieron el 2, 7 y 22 de enero de 2002 y todas ellas respecto de la modalidad “Quiero el Contrato Libre” y aportando la siguiente documentación:



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

- Condiciones Generales del contrato aprobadas mediante Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones (hoy, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información) del Ministerio de Fomento (actualmente, Ministerio de Ciencia y Tecnología) de 26 de abril de 2000.
- Carta remitida a Amena el 9 de enero de 2002 comunicándole la recepción de numerosas reclamaciones de consumidores que quisieron contratar el denominado “Contrato 35” y Amena se negó a ello.
- Contestación de Amena de 18 de febrero de 2002 en la que manifiesta que *“podrá comprobar la solvencia del cliente, por sí o por quien actúe por su cuenta e interés, mediante el acceso a ficheros automatizados en los que los datos de carácter personal se hayan obtenido de conformidad con las disposiciones vigentes, así como verificar la exactitud de los datos aportados por el cliente.”*
- Fax remitido por el Centro de Activaciones de Amena al Centro Amena de Zaragoza indicando que se comunique a un determinado cliente que no es posible realizar la activación solicitada y que se le ofrezca una solución de prepago.
- Reclamación presentada por otra socia en el Centro Amena Zaragoza respecto al rechazo que ha sufrido para suscribir con Amena el denominado “Contrato 35”, quejándose de que no exista publicidad alguna sobre esa posibilidad.

Sexto.- Mediante escrito que tuvo su entrada en esta Comisión el día 30 de mayo de 2002, Amena atendió al requerimiento que se le efectuó, manifestando que:

- Si se le da traslado del expediente entendiendo que se trata de una reclamación, el cauce de resolución establecido legalmente supone la intervención de las Juntas Arbitrales de Consumo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y las propias oficinas de reclamaciones de los operadores.
- Las condiciones generales de contratación que se aplican al “Contrato Libre” son las mismas que para el resto de tarifas ofrecidas por Amena a sus clientes postpago y están aprobadas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información mediante Resolución de 28 de marzo de 2001, tal y como se adjuntan.
- Respecto a la exigencia de requisitos de carácter subjetivo:



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

- a) no se exige con carácter general ninguna edad mínima para poder contratar, únicamente la mayoría de edad por ser éste un requisito establecido legalmente
- b) la solvencia de un cliente es un aspecto que Amena considera y valora de modo que se accede a las solicitudes presentadas cuando Amena entiende que el cliente puede tener la capacidad económica suficiente para poder hacer frente al pago de sus recibos de forma normal. En la valoración efectuada se toman en consideración los datos facilitados por el cliente y las bases de datos sobre morosos que existen.

Asimismo manifiesta Amena que ella es la primera interesada en conseguir un nuevo cliente por lo que los requisitos de solvencia exigidos son los mínimos imprescindibles necesarios para garantizar la viabilidad de la relación contractual.

- No existe en la actualidad ningún requisito específico necesario para la contratación de esta tarifa en particular, adjuntando como documento acreditativo fotocopias de la publicidad de Amena sobre el Contrato Libre.

Séptimo.- Con fecha 30 de mayo de 2002, tuvo entrada en el Registro de la CMT, escrito presentado por la D. Rafael Antonio Luque Fobelo solicitando a esta Comisión que se estudie el comportamiento y las prácticas comerciales descritas imponiendo, en su caso, la sanción administrativa correspondiente, para que dichas prácticas no se produzcan.

En concreto, en dicho escrito se expone que:

- el día 17 de mayo de 2002 compró un teléfono Motorola postpago libre, modelo T 191-L a un determinado proveedor
- dos días más tarde, el proveedor le indica que la compañía Amena contesta que no suscribe el contrato que previamente había firmado, señalándole que ya no le venden el móvil

Al escrito remitido, se le acompaña copia de la factura de compra del terminal así como justificante acreditativo del pago efectuado mediante tarjeta bancaria.

A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

PRIMERO. Calificación de los escritos.

Los escritos presentados por la Asociación de Consumidores “Torre Ramona” y D. Rafael Antonio Luque Fobelo que tuvieron entrada en esta Comisión los días 24 de abril y 30 de mayo de 2002, respectivamente, constituyen sendas denuncias, en cuya virtud se pone en conocimiento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones determinados hechos respecto a una supuesta conducta discriminatoria de Amena en relación con la contratación del denominado “Contrato Libre”.

Pese a que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC) establece que la denuncia es una de las formas de provocar el acuerdo de inicio de oficio de un procedimiento administrativo, sin embargo, no recoge una definición concreta de lo que debe entenderse por “denuncia”.

A este respecto, según definición dada por la Real Academia Española, debe entenderse por denuncia *“noticia que de palabra o por escrito se da a la autoridad competente de haberse cometido algún delito o falta”*. Asimismo el artículo 11 del Reglamento del Procedimiento Sancionador, aplicable únicamente a los procedimientos sancionadores tramitados, determina que:

“A efectos del presente Reglamento, se entiende por: (...)

d) Denuncia: El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir infracción administrativa”.

En los escritos suscritos por la Asociación de Consumidores “Torre Ramona” y D. Rafael Antonio Luque Fobelo, que han sido presentados ante esta Comisión, se alude a la presunta negativa injustificada de AMENA (como operador prestador del servicio de telefonía móvil) a aceptar determinadas solicitudes de contratación, lo que pudiera constituir un incumplimiento de la actual normativa de telecomunicaciones y de sus obligaciones como prestador del servicio de telecomunicaciones. De acuerdo con esto y con el precepto transcrito, han de calificarse los escritos de referencia como dos denuncias a fin de examinar, con la consideración de las alegaciones presentadas durante el trámite de actuaciones previas abierto al amparo del artículo 69.2 de la LRJPAC, si procede iniciar el correspondiente expediente.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

SEGUNDO. Delimitación material del objeto de la reclamación.

El escrito presentado ante esta Comisión por la Asociación de Consumidores “Torre Ramona” se fundamenta en la supuesta negativa por parte de Amena a aceptar las solicitudes de contratación suscritas por diferentes socios dirigidas a esta entidad como operador de telefonía móvil disponible al público, por razones de edad y de falta de solvencia.

Y, por su parte, el escrito presentado por D. Rafael Antonio Luque Fobelo ante esta Comisión también recoge la negativa de Amena a suscribir con él un contrato de prestación del servicio telefónico móvil en su modalidad de postpago.

En atención a lo anterior, cabe significar que el contenido material de ambos escritos consiste en sendas reclamaciones relativas a la negativa de Amena a prestar el servicio telefónico móvil a determinados usuarios. A tal efecto, una vez realizada la valoración de las actuaciones practicadas, resulta necesario, en primer lugar, analizar qué obligaciones ostenta Amena en materia de prestación del servicio telefónico móvil frente a los usuarios que pretenden recibir tal prestación y, en segundo lugar, determinar la habilitación competencial que ostenta la Administración de Telecomunicaciones en esta materia.

TERCERO. Valoración de las actuaciones practicadas.

La problemática planteada por la Asociación de Consumidores “Torre Ramona” y D. Rafael Antonio Luque Fobelo, a los efectos que aquí interesan, hacen directa referencia a la actuación de Amena como operador prestador del servicio telefónico móvil disponible al público y a sus obligaciones de transparencia y no discriminación entre usuarios así como de admisión a todas las personas físicas o jurídicas que lo deseen.

Examinados los escritos y los documentos adjuntos presentados por la Asociación “Torre Ramona”, D. Rafael Antonio Luque Fobelo y AMENA, que forman parte del presente expediente, se ha de poner de relieve que, a juicio de esta Comisión, los mismos permiten concluir que:

- no ha quedado suficientemente acreditada la negativa de AMENA a suscribir el denominado “Contrato Libre”, modalidad de postpago, a quienes sean menores de 25 años. La Asociación “Torre Ramona” ha alegado tal práctica, sin embargo, y pese a las actuaciones practicadas en este procedimiento, no ha aportado documentación acreditativa alguna al respecto.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

- sí ha quedado suficientemente acreditada la negativa de AMENA a suscribir el denominado “Contrato Libre”, modalidad de postpago, a aquellas personas que a su juicio no cumplen un determinado nivel de solvencia según valoración realizada a partir de los datos aportados por el propio usuario y de la información obtenida de determinadas bases de datos. Tanto los demandantes como AMENA han reconocido la existencia de tal práctica generalizada y, además, han sido aportados documentos acreditativos de la negativa de AMENA a activar el denominado “Contrato Libre” postpago, con la recomendación de contratar la modalidad prepago, en alguna ocasión.

CUARTO. Obligaciones de AMENA respecto a la prestación del servicio telefónico móvil disponible al público.

En cuanto al análisis de la obligación de AMENA de prestar el servicio telefónico móvil que debe realizarse en el marco de este expediente, debemos tener en cuenta que tal obligación deriva, por una parte, de las propias obligaciones asumidas en virtud del título habilitante que ostenta para llevar a cabo tal prestación del servicio y, por otra parte, de las obligaciones que emanadas de la legislación vigente.

Así, en primer lugar, debe señalarse que AMENA está habilitada para la prestación del servicio telefónico móvil disponible al público en virtud de una concesión para la prestación del servicio de comunicaciones móviles personales en su modalidad DCS 1800 convocada a concurso por la Orden de 26 de febrero de 1998 y a ella otorgada por Orden de 24 de junio de 1998.

A los efectos que interesan en este procedimiento, tal y como establece la Base 24 del Pliego de Bases Administrativas particulares y de prescripciones técnicas para la adjudicación de la citada concesión, AMENA, en su calidad de adjudicataria, está obligada al *“cumplimiento fiel y exacto de los términos de la concesión, con pleno respeto a los derechos y libertades reconocidos en la Constitución”* y, en concreto está obligada a:

“b) Admitir como abonados al servicio a todas las personas físicas o jurídicas que lo deseen, sin más limitaciones que las que se deriven de la capacidad técnica del servicio.”

En este sentido, el Contrato Administrativo de Concesión para la prestación del servicio de telecomunicación de valor añadido de Comunicaciones móviles personales en su modalidad DCS 1800 y concesión demanial aneja suscrito por AMENA y la Administración del Estado con fecha 24 de julio de 1998 en



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

virtud de la adjudicación del contrato resuelta a su favor, establece en su cláusula Primera que

“El concesionario se compromete a realizar por su cuenta y riesgo el objeto del contrato con estricta sujeción a lo dispuesto en el Real Decreto 1252/1997, de 24 de julio, Real Decreto 1486/1994, de 1 de julio, pliego de bases administrativas y particulares y de prescripciones técnicas aprobado por Orden de 26 de febrero de 1998, así como a lo establecido en estas cláusulas.”

y la cláusula sexta del mismo Contrato Administrativo determina que

“El concesionario se somete al pliego de bases administrativas particulares y de prescripciones técnicas aprobado por Orden de 26 de febrero de 1998 que rige para este concurso ...”

En segundo lugar, y teniendo en cuenta que aún no ha sido transformado el citado título en la actualidad, debe tomarse en consideración que el apartado 2.c) de la Disposición transitoria primera de la Orden de Licencias, ha especificado que *“los títulos para la prestación de servicios de telefonía móvil automática se transformarán en licencias individuales de tipo B2”*. En consecuencia, aún cuando estos títulos todavía no hayan sido objeto de transformación formal - como es la citada concesión adjudicada a Amena – sin embargo, deben ser interpretados teniendo en cuenta este criterio. Asimismo, ha de tenerse en cuenta el apartado b) del punto 6 de la Disposición transitoria primera de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (en adelante, LGTel) que establece que la normativa de desarrollo de la legislación vigente hasta la entrada en vigor de esta Ley tan sólo será de aplicación en lo que no se oponga a ella y, en especial, a las normas sobre libre competencia.

En este sentido, el artículo 35.1 de la LGTel señala que *“Los titulares de servicios de telecomunicaciones disponibles al público y los titulares de redes públicas de telecomunicaciones para cuya prestación, instalación o explotación se requiera licencia individual, de conformidad con lo dispuesto en el Título II, se sujetarán al régimen de obligaciones de servicio público”*. Esta misma consideración también se recoge en el artículo 6 del Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones (en adelante, Reglamento de Servicio Universal).

Y, en tal sentido, el artículo 35.2 de la LGTel señala que *“El cumplimiento de las obligaciones de servicio público en la prestación de servicios y en la explotación de*



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

redes de telecomunicaciones para los que aquéllas sean exigibles, se efectuará con respeto a los principios de igualdad, transparencia, no discriminación, continuidad, adaptabilidad, disponibilidad y permanencia y conforme a los criterios de calidad que reglamentariamente se determinen ... y el artículo 7 del Reglamento de Servicio Universal establece que en la prestación de los servicios que lleven aparejadas obligaciones de servicio público los operadores deberán cumplir, entre otras obligaciones de servicio público de carácter general:

“b) Otorgar igual trato y permitir idénticas condiciones de acceso y uso a los servicios para los usuarios”

De todo lo anterior se desprende que AMENA resulta obligada a dar el acceso a sus servicios a aquellas personas que lo soliciten de forma no discriminatoria.

En primer lugar, se ha de señalar que la aplicación de cualquier condición por parte de los operadores a los usuarios debería presentarse objetivada y ser transparente, para asegurar, en todo caso, que la aplicación de la misma no alberga prácticas discriminatorias. Por ello, sería necesario que estuvieran previamente determinados los criterios a aplicar a los usuarios como condicionantes de la contratación y que dichos criterios fueran conocidos por éstos.

Por otro lado, se ha de analizar si la condición de solvencia, al margen de la necesaria transparencia que exigiría su aplicación, es un criterio que permite dar un trato diferente a los usuarios.

Como es de sobra conocido, el principio de igualdad de trato implica aplicar condiciones iguales a situaciones equivalentes. Lo que ha de cuestionarse, entonces, es si el trato diferente dado a los clientes para los que no se admite la modalidad postpago se encuentra justificado objetivamente en las condiciones de solvencia que concurren en cada uno de ellos.

Cierto es que el trato diferenciado dado por AMENA a quienes pretendían activar el “Contrato Libre” se debe a la diferente condición de solvencia que presenta cada usuario. La posibilidad de dar un trato diferente en función de sus circunstancias de solvencia es un aspecto que está contemplado en la normativa de telecomunicaciones. De hecho, la normativa prevé la exigencia de una depósito previo en caso de existencia de impagos en la prestación del servicio telefónico (tanto en el mismo contrato de abono como en otros, vigentes o no) y tanto en el momento de contratar como durante la vigencia del propio contrato.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

No obstante, a diferencia de lo anterior, AMENA excluye la posibilidad de contratar postpago a los clientes que no reúnan las condiciones de solvencia que este operador juzga necesaria en cada caso.

Por tanto, la distinción que por motivos de solvencia efectúa AMENA entre los usuarios y las diferentes consecuencias a que ella da lugar, admitir o rechazar la contratación postpago, podrían no estar suficientemente objetivadas, todo lo cual debería ser analizado en profundidad por la Administración competente.

QUINTO. Habilitación competencial de la Administración de Telecomunicaciones.

Como consecuencia del contenido material de las denuncias presentadas por la Asociación de Consumidores “Torre Ramona” y D. Rafael Antonio Luque Fobelo, el análisis que a continuación se realiza se refiere a la competencia de la Administración para resolver una reclamación de un usuario relativa al presunto incumplimiento de AMENA con respecto a la debida provisión del servicio de telefonía móvil en su modalidad DCS-1800, postpago a los usuarios.

En concreto, para determinar si es competente esta Comisión para resolver acerca de la cuestión planteada en las denuncias, ha de analizarse si la conducta descrita en los escritos de denuncia se puede considerar como una conducta revisable directamente por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

En primer lugar, la obligación de AMENA de admitir como abonado a sus servicios a todas las personas físicas o jurídicas que lo deseen, sin más limitaciones que las que se deriven de la capacidad técnica del propio servicio, resulta ser una de las obligaciones que se le exigen a AMENA derivadas del título habilitante que posee para prestar el servicio telefónico móvil. En cuanto a la competencia de la Administración para efectuar el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por AMENA como adjudicataria de una concesión para prestar el servicio de comunicaciones móviles personales en su modalidad DCS 1800, ha de tenerse en cuenta que la cláusula Decimosexta del contrato administrativo suscrito entre Amena y la Administración del Estado señala que

“[...] Las cuestiones surgidas de la interpretación o cumplimiento del presente contrato serán resueltas por el órgano administrativo de contratación [inicialmente el Ministerio de Fomento y, en la actualidad, el Ministerio de Ciencia y Tecnología], sin perjuicio de las facultades de interpretación que tiene atribuidas la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones. Contra los



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

acuerdos del órgano de contratación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley reguladora de dicho orden jurisdiccional.”

En segundo lugar, tal y como se ha indicado, la obligación de AMENA a dar acceso y uso del servicio telefónico móvil prestado por ella con igualdad de trato para los usuarios, resultaría ser una de las obligaciones de servicio público que se le exigen. En cuanto a la competencia de los órganos de la Administración para efectuar el control de las obligaciones de servicio público que establece la LGTel y el Reglamento de Servicio Universal para la prestación del servicio telefónico móvil por parte de AMENA, ha de observarse el contenido del artículo 35.2 de la LGTel, en su actual redacción, el cual establece que

“Corresponde al Ministerio de Ciencia y Tecnología el control y ejercicio de las facultades de la Administración relativas a las obligaciones de servicio público que se imponen en este artículo.”

De lo señalado con anterioridad debe concluirse que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene competencia para (i) exigir a AMENA el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la adjudicación de la concesión para la prestación del servicio de telecomunicación de valor añadido de comunicaciones móviles personales en su modalidad DCS 1800 y concesión demanial aneja y (ii) efectuar el control de las obligaciones de servicio público establecidas por la normativa vigente que debe observar AMENA.

Vistos los citados antecedentes y fundamentos jurídicos, esta Comisión

RESUELVE

Primero.- No iniciar intervención alguna en relación a las reclamaciones planteadas por la Asociación de Consumidores “Torre Ramona” y por D. Rafael Antonio Luque Fobelo en sus escritos presentados los días 24 de abril y 30 de mayo de 2002, respectivamente, por falta de habilitación competencial para conocer de la alegada conducta llevada a cabo por la entidad Retevisión Móvil, S.A.

Segundo.- Remitir las actuaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el Artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la resolución a la que se refiere el presente certificado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante esta Comisión en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación o, directamente, recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.ocho de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, la Disposición adicional cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 del la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

José María Vázquez Quintana

José Giménez Cervantes